

DEL BARRIO A LA FABRICA

Pere Beneyto

Publicado en El Diario.es

Del barrio a la fábrica (1)

En el marco de las actividades y publicaciones del programa “España en libertad (1975-2025)”, promovido por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, en la Universidad del País Vasco se celebraron recientemente las Jornadas sobre “Una sociedad en movimiento: la reorganización de la trama ciudadana desde los movimientos sociales”, en las que participamos con una ponencia sobre el asociacionismo vecinal y sus conexiones con el movimiento obrero y el emergente feminismo social, de la que seguidamente presentamos las aportaciones más significativas, con especial referencia al ámbito valenciano.

Las asociaciones de vecinos han recibido, frecuentemente, una consideración secundaria en el contexto de los movimientos sociales de oposición a la dictadura de Franco. Mientras que el estudiantil ha sido reivindicado por sus propios protagonistas, todos muy letrados y el sindicalismo obrero sostiene una política activa de la memoria (en el caso de CCOO al menos desde 1986), el asociacionismo vecinal goza de peor fortuna. Ello puede tener que ver con el carácter más prosaico, localista y circunstancial de sus reivindicaciones, a su funcionamiento en coordinadoras muy diversas y a un muy precario reconocimiento institucional en democracia. Lo cierto es que fue un movimiento protagonizado en gran medida por las mujeres de barrios obreros. Ofreció espacios de actuación a la militancia antifranquista, que estaba detrás de muchas iniciativas asociativas, también a economistas y jóvenes profesionales de la abogacía y del urbanismo, puso contra las cuerdas a las últimas corporaciones franquistas y, ante todo, planteó una reapropiación popular de la ciudad como bien común,

con planes alternativos a los del capitalismo depredador en su versión franquista. En la década de 1980, reivindicaciones del movimiento ciudadano quedaron en buena medida recogidas en los primeros planes de ordenación urbana de la democracia. En Valencia debemos al movimiento vecinal y ciudadano de la Transición la quiebra de la “ciudad monstruo” desarrollista y su alternativa en el Plan General de 1988, con el Jardín del Turia como eje vertebrador.

En esta primera entrega de la serie que hemos titulado *Entre el barrio y la fábrica*, nos ocuparemos del contexto y la historia del movimiento vecinal. En un segundo artículo analizamos esta experiencia participativa como escuela de ciudadanía y sus vínculos con el movimiento obrero. En un tercer y último artículo de la serie, la historiadora Vicenta Verdugo trata desde una perspectiva de género de la implicación de las mujeres en la lucha de los barrios. Frente la mercantilización de la ciudad y de todas las necesidades, que nos reduce a la condición de sujetos consumidores explotados por las oligarquías de los fondos de inversión y las redes sociales, el movimiento vecinal y ciudadano de los años 1970 sigue siendo un referente de reapropiación de la ciudad para el bien común.

Capitalismo urbano y excepción española

Entre los autores que fueron un referente en particular para los profesionales que militaron en el movimiento vecinal durante la Transición destacan Manuel Castells y Jordi Borja. Ambos han escrito sobre temas de sociología, política y urbanismo hasta la actualidad. En 1986, a los 10 años del inicio de la Transición, hicieron balance de la experiencia del movimiento vecinal y ciudadano en sendas publicaciones, Manuel Castells en *La ciudad y las masas. Sociología de los movimientos sociales urbanos* (Madrid, Alianza, 1986) y Jordi Borja en *Por unos municipios democráticos. Diez años de reflexión política y movimiento ciudadano* (Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1986). Respecto a la literatura más actual, debemos destacar dos obras colectivas: *Memoria ciudadana y movimiento vecinal*, editada en 2008 por Vicente Pérez Quintana y Vicente y Pablo Sánchez León sobre Madrid, y ya plenamente en el ámbito de la historiografía, *Construint la ciutat democrática*, coordinada en 2010 por Carme Molinero y Pere Ysàs sobre el área de Barcelona. En general, el movimiento vecinal ha despertado un creciente interés desde 2008 y es el área catalana la que, con diferencia, mayor

atención ha recibido. En la web del proyecto del Instituto de Historia del Tiempo Presente de la Universidad de Almería sobre el movimiento vecinal en esta ciudad y provincia andaluza encontramos una relación de 249 publicaciones editadas entre 1972 y 2023 (<https://movimientovecinal.es/>). Las áreas metropolitanas de la década de 1970 son objeto de 39 publicaciones en el caso de Cataluña, 16 en el de Madrid y 11 para Euskadi.

El movimiento vecinal fue parte central de un más amplio movimiento ciudadano, con un fuerte componente obrero pero también de clases medias y profesionales, no exclusivo de España. La protesta, la reivindicación y el asociacionismo urbano fueron un fenómeno común en la Europa capitalista de posguerra, impulsado en particular por las migraciones a áreas industriales en condiciones de falta de vivienda, infraestructuras y servicios. A estas carencias respondieron gobiernos y ayuntamientos con mejor o peor fortuna. Un ejemplo paradigmático son las *banlieues* francesas. La Italia de posguerra, con muchas comunas industriales gobernadas por el PCI, representa otra experiencia a la que prestaron atención nuestros activistas vecinales. Lo específico de ese fenómeno en la España franquista viene dado por el régimen de dictadura centralista en que vivíamos: vigilancia y represión sobre las iniciativas asociativas de los vecinos, ayuntamientos sin recursos ni autonomía, corporaciones locales conectadas con intereses especulativos a los que favorecían y de los que se beneficiaban, etc.

Efectivamente, el movimiento vecinal creció en España a partir de la denuncia que entidades diversas, primero, y las asociaciones de vecinos, después, hicieron de las precarias condiciones de las viviendas y de la inexistencia o insuficiencia de infraestructuras y de servicios públicos, una situación que era resultado de las políticas franquistas – o más bien de su ausencia – y de la especulación desbocada que las autoridades consintieron y de la que muchas participaron, lo que apunta a la corrupción inherente a la dictadura, fundada en favores y privilegios entre franquistas desde tiempos del estraperlo, normalizada por la falta de transparencia y controles democráticos. A su vez, los ayuntamientos eran el eslabón más débil del poder franquista, con alcaldes y corporaciones sin recursos, subordinados por completo al gobernador de turno, algo

que, al igual que la tardía convocatoria de las primeras elecciones municipales democráticas en la Transición, puede tener relación con la mala experiencia que para la monarquía tuvieron las elecciones municipales de abril de 1931.

En su introducción de 2010 al libro colectivo sobre el movimiento vecinal barcelonés *Construint la ciutat democràtica*, los historiadores Carme Molinero i Pere Ysàs relacionan la eclosión de las reivindicaciones vecinales con las contradicciones de la dinámica política de la dictadura en los años 60 y 70. La emigración a Cataluña desde los años 50, a pesar de los esfuerzos contrarios de la dictadura, se convirtió en una *espectacular oleada* que dio lugar a la formación de barrios enteros sin previsión ni planificación alguna, bien en forma de chabolas sin agua corriente, alcantarillado o electricidad como las de Torre Baró que muestra la película *El 47*, o bien en forma de bloques de viviendas de construcción muy deficiente y sin dotaciones escolares o sanitarias. Era una situación sorprendente, dada la orientación intervencionista y controladora del Estado franquista.

Como explica el historiador Ismael Saz, la dictadura se sostenía desde sus orígenes sobre el arbitraje que ejercía Franco entre dos vertientes de la extrema derecha nacionalista española: la autoritaria de los monárquicos golpistas de Acción Española, por un lado, y la fascista pseudo-movilizadora de la Falange, por otro. La tensión entre el vector autoritario y el fascista otorgó una dinámica política a la dictadura, que buscaba sobrevivir a Franco, pero se estrelló con una fuerte contestación social al agotarse los réditos de la terrible represión de los primeros años. A resultas de la crisis de gobierno de 1957, el vector autoritario de los llamados “tecnócratas del Opus Dei” esperaba obtener con el crecimiento económico un amplio consentimiento. Por su parte los falangistas buscaron la adhesión popular mediante una cierta apertura muy controlada a la participación, mediante la Ley de Asociaciones de 1964, la eliminación de controles a la presentación de candidatos en las elecciones sindicales de 1966 y la Ley de Prensa o “Ley Fraga”, también de 1966. Tecnócratas y falangistas fracasaron en sus expectativas. Los tecnócratas no realizaron la reforma fiscal que necesitaba el sistema para atender las demandas generadas por el aluvión de población que se incorporaba a la industria y la vida urbana, el *verticalismo* vio crecer en su seno y en el mundo laboral el movimiento antifranquista de las CCOO, y la Ley Fraga cambió

de hecho la censura previa por la autocensura. En definitiva, no se alteró la esencia clasista y represiva del régimen. El estado de excepción de 1969 y la reacción contra CCOO que culmina en el Proceso 1001 muestran el agotamiento en la capacidad evolutiva de la dictadura.

El nuevo movimiento ciudadano encontró cobertura legal en la Ley de Asociaciones de 1964, que buscaba regular el asociacionismo cultural, lúdico, deportivo y asistencial, permitido siempre que no fuese contrario “a los Principios Fundamentales del Movimiento”. Este último argumento fue muy utilizado para clausurar o mantener a muchas asociaciones en la ilegalidad. A propósito de Madrid, Manuel Castells (2008) rememora las “condiciones de libertad vigilada” en que llegó la democracia, con muchas asociaciones no autorizadas, sus militantes perseguidos y encarcelados, incluso asesinados, como sucedió el 24 de enero de 1977 a los abogados de la calle Atocha que asesoraban al movimiento de barrios de la periferia obrera de la capital.

El movimiento vecinal eclosionó con fuerza entre 1974 y 1977, pero entró en declive a partir de las primeras elecciones legislativas democráticas y más aún desde las municipales de 1979. Este declive ha sido motivo de un cierto debate sobre la relación con los partidos políticos y el reconocimiento institucional que han recibido las asociaciones de vecinos en la actual democracia. Para unos era el resultado natural del cambio radical del marco político de actuación del movimiento ciudadano: buena parte de sus activistas y líderes lo eran por su militancia en partidos políticos y abandonaron las asociaciones al ser cooptados en los nuevos ayuntamientos democráticos, desde los que actuaron como interlocutores para en gran medida hacer realidad las reivindicaciones vecinales. Para otros muy críticos como M. Castells, el problema radicaría, como tantas cosas que se atribuyen a herencias franquistas pero caen en el debe de la actual democracia, en cierta defensa o bloqueo practicado por los partidos respecto a una política más participativa de base representada por las asociaciones ciudadanas. Lo cierto es que incluso firmes adalides del movimiento ciudadano, entonces y ahora, como Jordi Borja (1977), reconocían ya a finales de 1976 el cambio radical de escenario político que se avecinaba con la llegada de la

democracia, cambio que obligaría al movimiento vecinal a reinventarse. El fuerte primer impulso del movimiento, que provocó no pocas sonadas dimisiones de alcaldes franquistas, tenía empuje propio en realidades vividas por los habitantes de la ciudad en su entorno inmediato, pero también era el reflejo de su función vehicular del antifranquismo.

Desde la historiografía, Carme Molinero y Pere Ysàs, en *De la hegemonía a la autodestrucción: el PCE 1956-1982* (2017), a propósito del partido más organizado, con más militantes y mayor implicación en los movimientos sociales del antifranquismo, fuese el vecinal o CCOO, advierten que al llegar la legalidad su dirección no buscó la desmovilización. Más bien todo lo contrario, esa implicación era un capital propio que quiso conservar e incrementar, indispensable antes y después de 1977 para evitar su marginación política, “dando una relevancia especial a las asociaciones de vecinos, y profundizar en el papel de dichos movimientos para configurar formas de *democracia de base* no contrapuestas a la democracia representativa para lograr una sociedad organizada y movilizada”.

Del barrio a la fábrica (II)

El éxito de la película *El 47*, en la que un convincente Eduard Fernández representa a Manolo Vital, líder sindical y militante de CC.OO. en el barrio barcelonés de Torre Baró, cabe interpretarlo tanto como un aval a su indudable calidad cinematográfica y también como la expresión del reconocimiento de muchos espectadores al valor simbólico del episodio histórico que la motiva (la lucha de un barrio periférico por el acceso a servicios dignos, incluido el autobús urbano) y del interés renovado por un cine próximo a las luchas sociales. La afluencia a los cines creció de una proyección a otra. Puede ser además una obra recomendable para un pedagogía en centros educativos sobre la lucha por la ciudad democrática en la Transición, siempre advirtiéndole que actuaciones reales como la que relata no fueron iniciativas aisladas de individuos indignados sino el resultado de decisiones colectivas y organizadas. Hubo otros 47, anteriores y posteriores, porque la clandestinidad avivaba el ingenio para idear acciones que eludiesen la represión estructural del régimen, se

difundían y se aprendía de otros éxitos y fracasos. Así está grabado en la memoria de las personas que lo vivieron y así lo demuestra la historiografía.

Clases trabajadoras, barrio y movimiento vecinal Manuel Castells (2008) sostiene que, en condiciones represivas, las asociaciones fueron *escuelas de democracia de base*, ofreciendo a sectores sin experiencia de lucha política la vivencia cotidiana de “plantear sus derechos sin pedir permiso a las autoridades”. Quedaron convencidos de que la dictadura no podía seguir existiendo al experimentar que “reunirse para alumbrar una calle o denunciar una estafa” situaba a los vecinos al borde de la ilegalidad. Y así “de repente, la gente que no era *política* descubrió que la democracia era una necesidad, no una consigna de *rojos*.” A su vez sus dirigentes, *rojos* en su gran mayoría, se cuidaron bien “de parar los pies a los militantes que intentaban convertir la reparación de un socavón en el acceso al barrio en trinchera de la revolución.” En definitiva, Castells subraya el carácter interclasista y transversal del movimiento, capaz de dar una participación a profesionales (urbanistas, abogados, economistas), mujeres y jóvenes que los grupos políticos no ofrecían. Las asociaciones promovían acciones que eran políticas en la práctica siendo a la vez ámbitos despolitizados o prepolíticos, promovían un “feminismo práctico” sin ser feministas, eran interclasistas aunque predominasen las clases trabajadoras entre las personas asociadas. En definitiva, ofrecían una participación muy abierta, efectiva y real, en contraposición a los partidos políticos, que exigían y exigen una adhesión ideológica, y a los sindicatos, que parten de intereses compartidos en un lugar de trabajo y sector laboral.

Al subrayar y loar la singularidad de un movimiento que no tenía “ni la fuerza ni el carisma del movimiento obrero”, corremos el peligro de disociar y diluir sus conexiones con el mismo. La contraposición sociológica entre movimientos unidos por *intereses*, en particular el obrero o sindical, y aquéllos más nuevos que responderían a *identidades* (nacional o local, de género u orientación sexual, etc.), la historiografía más próxima a la comprensión de vivencias y experiencias locales, colectivas y personales, descubre una realidad compleja irreductible a esos dos vectores. Así, la clase obrera inmigrante llegó a los nuevos barrios con un importante bagaje cultural y de experiencias que, unido a la vivencia de nuevas condiciones de

vida y trabajo, dio lugar a culturas reivindicativas y de lucha social con una fuerte identidad local. El mapa de las asociaciones de barrio activas en Valencia en 1977, elaborado por la comisión del PCPV para el movimiento ciudadano, muestra una sustancial coincidencia con el de las nuevas barriadas de aluvión inmigratorio obrero que rodeaban la ciudad. Más allá de esta contundente evidencia, a fin de ampliar nuestro horizonte para una perspectiva comparada, antes de volver a Valencia resulta interesante detenernos en las áreas metropolitanas de Barcelona, Madrid y Bilbao. Nos apoyamos en buena medida en el estudio contemporáneo de Jordi Borja (1977).

En 1976, Barcelona tenía dos millones de habitantes y era el centro de un área de casi cuatro, con cinco ciudades de más de 100 mil y diez que superaban los 20 mil. Tenía una gran tradición asociativa popular y de barrio, arrasada por la dictadura tras la conquista franquista de Catalunya en febrero de 1939, hasta que en los años 50 se fue recuperando con participaron de colegios profesionales y entidades culturales catalanistas. En la década de 1960 y hasta 1975 había *asociaciones de calle* llamadas “bombilleras”, de comerciantes y vecinos de barrios tradicionales que se acogieron a la Ley de 1964 y colaboraban con el ayuntamiento; *asociaciones de vecinos* en barrios populares y de clases medias que serán legalizadas pero entrarán en conflicto con los poderes franquistas; y *comisiones de barrio* en la periferia obrera impulsadas por militantes de izquierdas, ilegales pero muy activas. En 1972, las asociaciones de barrio más reivindicativas se unieron en la Coordinadora de Sant Antoni, ligada a la Asamblea de Catalunya, y en 1974 entraron en la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, donde eran minoritarias pero pronto marcaron la agenda. Entre 1975 y 1976, la Federación planteó la lucha contra el Plan Comarcal y por la dimisión del alcalde Viola, la campaña contra la represión y por la amnistía, por la lengua y la cultura catalanas, las protestas contra la carestía y la campaña “Salvem Barcelona” a finales de 1976. En los barrios periféricos y de la región metropolitana, de inmigración obrera y más débil tejido asociativo, las reivindicaciones eran más básicas y el desprestigio de las autoridades franquistas era aún mayor, estableciéndose una estrecha relación entre el movimiento obrero y los barrios.

Madrid pasó en tan solo 30 años de ser una ciudad de un millón de habitantes a formar un área metropolitana de casi cuatro. Era la capital política de una dictadura y un Estado muy centralista y sensible a cualquier irrupción de la protesta en la calle, lo que determinaba un poder municipal extremadamente débil y con poco margen negociador. El movimiento vecinal se abrió paso con más dificultades que en Barcelona o Bilbao, apoyado casi solo en los barrios periféricos y con un inevitable radicalismo social por falta de interlocutores. Pero en 1975 dio un gran salto adelante y en 1976, con una notable incorporación de profesionales, se unieron en una federación provincial 108 de las 138 asociaciones existentes, aunque sólo 28 estaban legalizadas. La asamblea constitutiva fue prohibida en febrero, pero representantes de 91 asociaciones consiguieron realizarla en octubre y al mes siguiente lanzaron el llamamiento “Los vecinos de Madrid por las Libertades”. En muchos barrios o distritos se formaron *coordinadoras de zona* de entidades ciudadanas y se establecieron lazos solidarios con el nuevo movimiento obrero, sobre todo en la lucha contra la carestía. El movimiento destacó por sus respuestas innovadoras a la crisis urbana de la capital en la solución al chabolismo, otorgando suelo urbano y nuevas viviendas en propiedad, en la creación de mini parques y plazas para aliviar la extraordinaria densidad urbana de la ciudad, como también en la recuperación de fiestas populares y la salvación de patrimonio histórico en peligro. Para rememorar desde la ficción literaria el Madrid de barrio en la Transición recomendamos la lectura de *Nunca voló tan alto tu televisor*, de Silvia Nanclares (Lengua de Trapo, 2025 colección Episodios Nacionales), protagonizada por una mujer de Moratalaz.

En diciembre de 1976 había 65 asociaciones en Vizcaya, 50 en el Gran Bilbao, la mayoría aún entonces sin legalizar. Se reunían periódicamente en una Asamblea de Asociaciones, tampoco legal. Agrupaban a unas 30 mil personas inscritas. Eran una parte de la abigarrada vida asociativa deportiva y cultural de los barrios populares característica de Bilbao. Muchas asociaciones se constituyeron a partir de núcleos originarios del movimiento obrero golpeados por el ciclo represivo de 1967 a 1969, apoyándose a menudo en la Iglesia para obtener locales y cobertura legal. A la inversa, el movimiento obrero buscaba en los conflictos laborales la solidaridad de las asociaciones. La militancia política y sindical antifranquista se hizo presente cada

vez más desde 1974, con campañas por la amnistía y los ayuntamientos democráticos. El Colegio Oficial de Arquitectos Vasconavarro (COAVN) puso su taller de arquitectura al servicio del movimiento. En la quiebra de legitimidad de los ayuntamientos franquistas destacó la situación de Euskadi con muchas dimisiones y la formación del Grupo de Bergara, formado por 67 alcaldes. Hitos como el *Libro Negro de Recalde* fue la punta de lanza para la dimisión de la alcaldesa bilbaína Pilar Careaga en 1975. Puede consultarse con mucha otra y diversa documentación en la [web del BBPM](#), una magnífica iniciativa que presta especial atención al activismo de las mujeres. En la introducción a esta web leemos:

Hablamos de la lucha de las mujeres al frente de las reivindicaciones ciudadanas en los duros años del franquismo o de los trabajadores de “Bandas” que contaron con todo el apoyo popular de los barrios para desarrollar su histórica huelga, pero también de las mujeres – *amas de casa* les decían – que con su trabajo y actitud en el día a día sacaban/sacan adelante a sus familias, a veces trabajando en casa y, casi siempre, trabajando en casa y fuera. También hablamos de los curas en los barrios obreros, que desde su compromiso cristiano cubrieron los déficits de la dictadura en el campo de la enseñanza. Sin olvidarnos de los jóvenes que dedican su tiempo libre a los demás como monitores de colonias o clubes juveniles – primeras escuelas de formación antifranquista – o de la lucha de las madres contra la droga. ¡Hay tantas, tantos de quien hablar!

El historiador José Antonio Pérez se ha ocupado de recuperar la memoria de aquellas mujeres trabajadoras del Gran Bilbao en su aportación al libro *Del hogar a la huelga: trabajo, género y movimiento obrero durante el franquismo* (2007).

Volvemos a Valencia. Según Jordi Borja (1977), en 1974 existían solo 10 asociaciones de vecinos en Valencia y su provincia, en 1975 eran ya 25 y en 1976 llegaban a 100. La gran mayoría estaban «en trámite» a fines de 1976, cuando se formó la Coordinadora de AAVV de l’Horta, en la que participaban regularmente 55 AA.VV., 21 de Valencia ciudad, presidida por Marcial López y con Just Ramírez como vicepresidente. López era un dominico de larga trayectoria pletórica de iniciativas de compromiso social y Just Ramírez era arquitecto

urbanista y el dirigente del MC en Valencia. Junto a Just Ramírez trabajaba Carles Dolç, autor de una reciente monografía sobre la lucha por el Saler y el Turia (2021). La experiencia de vecinas y vecinos en el movimiento de barrios fue un aprendizaje. Carles Dolç recoge por ejemplo el testimonio de Dolores García Cantús, militante comunista en la asociación de la Dehesa, sobre el uso de dos libros de actas, el oficial que se pasaba a visar por el Movimiento y el real que recogía lo que de verdad se hablaba en las reuniones. 1976 fue el año decisivo para la ruptura, la percepción de que se podía y se debía forzar e imponer el tránsito a un régimen de libertades. Se observa en el cambio de actitudes entre la campaña *El Saler per al poble*, que consiguió detener en el verano de 1974 los planes de privatización de la Dehesa, y la posterior campaña *El Túria és nostre i el volem verd*, que en 1976 le tomó el relevo. En la presentación pública de candidatos de los partidos de izquierdas en las primeras elecciones de la democracia, la experiencia de la inmigración y la represión, así como la militancia en CC.OO. y en el movimiento vecinal, solían darse a conocer después de años de lucha clandestina. Las conexiones entre movimiento vecinal y obrero, entre el barrio y la fábrica, fueron múltiples e intensas. Lo muestra una simple lectura de los boletines de las asociaciones y un caso paradigmático podría ser el de la Malvarrosa, cuya asociación fue clausurada por solidarizarse con los huelguistas de astilleros, vecinos del barrio en su mayoría, en enero de 1974, episodio que ha explicado José Durbán en el volumen I de Rutas de la Memoria Obrera editado por la FEIS.

Manifestación en Burjasot reclamando un ambulatorio (Archivo FEIS)0

